

nuevos contextos que sin duda influyen en una nueva división del estado.

De manera que la región es un espacio dinámico, que se mueve y evoluciona con el devenir histórico, con los requerimientos económicos del sistema, pero también como efecto de los movimientos sociales. Finalmente me parece que echar un vistazo al pasado y a la evolución geoeconómica del país, podría ser una buena fuente explicativa del dinamismo y actual conformación de las regiones, así como de algunas de sus problemáticas.

Por un desarrollo integral de las zonas indígenas

Manuel Roberto Parra Vázquez*

Introducción

La incorporación de los pueblos indígenas a la nación está inmersa en una noción que cada vez se arraiga más: la modernización del país sólo puede transcurrir por la vía del desarrollo urbano-industrial, idea que ha sido puesta en el banquillo de los acusados por los acontecimientos de Chiapas. En los años 40 se creía que al fortalecer a los grandes polos de desarrollo urbano, éstos absorberían paulatinamente a la población rural, la cual encontraría en las ciudades mejores niveles de vida, inalcanzables en el campo. Sin embargo, esta política generó grandes desigualdades regionales, por lo que, al evidenciarse sus debilidades, se intentó corregirla. Así, en los años 70 se comenzó a pensar en las ciudades medias como una barrera de contención de la migración a las grandes urbes, idea que más tarde tomaría forma de políticas específicas para el desarrollo de un sistema de ciudades que permitiera, mediante las inversiones estatales, prestar los servicios públicos a la población y propiciar las inversiones privadas generadoras de empleo urbano. El incumplimiento de estas expectativas generó una recuperación de la producción campesina de autoconsumo, dando lugar al avance de la frontera agrícola, la deforestación y la afectación de los mantos acuíferos. En este contexto general, amida el conflicto de Los Altos de Chiapas.

* Investigador del Colegio de la Frontera Sur.

del cual se estancó la producción, con lo que se retrajo una de las principales fuentes de empleo rural en el estado. Aunque en 1994 se produjo el repunte de los precios, no se pudo aprovechar por las condiciones de guerra, habiéndose perdido 15 millones de jornales de los 80 millones que anualmente generaba la cafecultura, situación que se extiende a otros productos de plantación (plátano, azúcar, mango, etc.) en los cuales la sobreoferta internacional genera una disminución del precio.

El resultado de todo este panorama es el aumento brutal del desempleo, que se agrava con la caída del poder adquisitivo del salario, el cual, en 1993, constituye sólo el 40% de 1981.

Sobreutilización de la tierra

La más dramática de las manifestaciones de esta permanencia de los campesinos en el campo son los cambios en el uso del suelo en la región alteña de Chiapas en las cuatro últimas décadas. En los catorce municipios que la componen, sin excepción, ha habido una sustitución del bosque por tierras de cultivo. Ejemplo extremo de este proceso es el municipio de San Andrés Larráinzar, donde en 1950 se había abierto al cultivo el 75% de las tierras municipales, y en 1990 se alcanzó el 99%, lo que da idea de la presión sobre la tierra. Esta trayectoria en el uso del suelo está aparejada a un cambio brutal en la composición étnica de su población: mientras en 1970 tenía un sector amplio de población ladina (20%), en las subsiguientes décadas fue progresivamente desapareciendo hasta tener un 100% de población tzotzil.

Este intrincado proceso entre uso del suelo y etnicidad está atravesado por las diversas formas que adquiere la tenencia de la tierra en cada territorio etnohistórico. Dentro de las zonas indígenas se buscó dotar de tierra a la población bajo dos modalidades: la dotación del ejido y la restitución de tierras comunales, lo que se combinó regionalmente de diversas maneras y con efectos opuestos. Se creó así una dicotomía entre lo comunal y lo ejidal que impacta directamente en la aplicación de los modelos y proyectos de

desarrollo: mientras el ejido representa una de las formas que adquirió la organización institucional del espacio rural, las tierras comunales escapan a las instituciones formales y gubernamentales constituyendo los espacios donde se desarrolla un tipo de organización territorial informal típica de las regiones mayas en Chiapas.

En Los Altos, PROCEDE llega a regularizar la tenencia de la tierra con una propuesta concebida para impulsar a las empresas agrícolas, mediante reconcentración de las tierras. Pero éste no es el caso, porque lo predominante es la tenencia comunal, basada en una organización familiar que otorga a cada unidad, hereditariamente, parcelas individuales, que son trabajadas por los miembros de la familia y que pueden ser vendidas o compradas dentro de la normatividad consuetudinaria que tienen las comunidades para ello; por tanto, aunque el 85% de la tierra alteña formalmente sean tierras ejidales, en realidad se manejan conforme a las normas tradicionales de las comunidades tzotziles, tzeltales y tojolabales las cuales ven con enorme recelo las reformas constitucionales al artículo 27, lo que explica que, hasta marzo de 1994, se habían incorporado al PROCEDE tan sólo 10 de los 106 ejidos y comunidades agrarias de la región.

El maíz pilar de la sobrevivencia

En el fondo de estas diversidades existe un pilar básico del ser campesino, que es asegurar el autoabasto de maíz: en el municipio de San Juan Chamula, en los años 70 la producción local sólo cubría el 30% del consumo, en tanto que en la década actual se llega a colmar hasta el 80% de las necesidades. Lamentablemente esto ha sido posible gracias a la ampliación de su frontera agrícola, la cual pasó de 26 393 hectáreas en 1970 a 52 024 en 1990, lo que significa un incremento del 100% de superficie cultivada. Durante este período, al mismo tiempo, la cantidad sembrada por cada hombre ocupado en la agricultura pasó de tres cuartos de hectárea a 1.13 hectáreas, lo que significa que la región es la expresión más acabada del minifundismo. El otro componente es el aumento de los rendimientos, los cuales pasaron de

827 kilos por hectárea a 1 169, es decir, un 41% de incremento. Este aumento de la producción no ha sido lineal. Si hacemos el seguimiento año con año veremos cambios moderados en la superficie cultivada pero fuertes fluctuaciones en los rendimientos, los cuales dependen del uso de agroquímicos: mientras el maíz aumenta de precio sube la producción, con el alza de precio de los insumos la producción se deprime.

La producción de maíz se sostiene, con rendimientos decrecientes, aún ante la necesidad de invertir mayor cantidad de insumos industriales y de trabajo, arrojando como saldo una bajísima productividad del trabajo: en Los Altos, levantar una tonelada de grano de maíz consume de 150 a 300 jornales, en tanto que a nivel nacional se consumen 17 y en los Estados Unidos se invierte menos de un jornal. Un elemento más que se desprende de estos datos es que los campesinos, a pesar de continuar trabajando sólo con aperos manuales están realizando un cambio tecnológico mediante la incorporación de fertilizantes y plaguicidas. Este proceso está ocurriendo prácticamente sin asistencia técnica, ya que la investigación agrícola ha ignorado la existencia de las áreas de temporal en ladera, asiento de la mayoría de la población indígena, especialmente en Chiapas.

Por lo tanto, sea cual fuere la estrategia que adopten, todos los campesinos indígenas están expuestos a la tendencia a la baja de los precios de maíz y a la tendencia alista de los agroquímicos. Por tal razón, se estima que el 80% de los maiceros de Chiapas ha caído en carteras vencidas, lo que ha dado lugar a que, en abril de 1995, 17 bodegas de CONASUPO hayan sido tomadas por grupos de campesinos pristas de diferentes puntos de la entidad, al tiempo que los maiceros de Bochil, Ixtapa, Villa Corzo, Villaflores y Jiquipilas, amenazan con tomar permanentemente la carretera federal que comunica a San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez, en demanda de que el gobierno federal y el gabinete agropecuario autoricen el pago de la tonelada de maíz a razón de 2 000 nuevos pesos (Cuarto Poder, 21 de abril de 1995).

Situación del mercado interno

Mientras que al producir maíz para el autoabasto se pierde "de todas todas", en la producción de hortalizas y flores hay posibilidades de obtener un ingreso monetario. Una situación tan diferente en la producción nos coloca ante la segunda estrategia campesina que señalábamos inicialmente: el mercado. La importancia de este sistema se aprecia en el hecho de que, en 1990, en Los Altos se destinaron 1 338 hectáreas a esta actividad, resultando significativo que al menos el 90% de la producción hortícola se destine al mercado. En ese año San Juan Chamula aportaba el 34% de su superficie con 454 hectáreas de hortalizas, mientras que en San Andrés Larráinzar tenía el 25% con 342 hectáreas y el municipio de San Cristóbal el 8% con 108 hectáreas. Esta estrategia es en sí misma una combinación cultural lograda por la comunidad indígena, que ha integrado la producción de hortalizas a la cría de borregos, sistema que conjugua la intensificación del uso de la tierra para la producción de hortalizas con el manejo extensivo de los rebaños de los borregos.

Esta combinación implica una diversificación que permite el desarrollo de patrones conservacionistas de los recursos con relativa sustentabilidad; llega a ser predominante y estable en el paisaje cuando los suelos son profundos, las laderas tienen poca pendiente y hay disponibilidad de agua. Una parte importante de esas 1 338 hectáreas de hortalizas que se encuentran en Los Altos están segmentadas en miniparcelas, fragmentado el paisaje, producto de un trabajo muy intenso que da por resultado cultivos libres de malezas y terrenos protegidos mediante un acucioso terraceado, resguardado a su vez con cercas vivas. Allí hay una irrigación manual o con rústicas mangueras en sembradíos en donde se esparcen las ovejas apersogadas.

Este sistema se ve paulatinamente debilitado: justamente en el momento en que los hortelanos acuden al mercado a vender sus productos se encuentran incapacitados para recobrar los gastos realizados en la compra de agroquímicos, el costo del transporte, y el pago de los impuestos —renta de piso—. Como podrá imaginarse, las hortalizas se venden a través de redes regionales controladas por intermediarios.

Dentro de los "coyotes" existe un grupo muy fuerte de chamulas que compra directamente la hortaliza a pie de la parcela y la revende en San Cristóbal, Tuxtla, Joigneito y Yoshib; estos intermediarios llegan a aducirse hasta de un 90% del precio pagado por el consumidor, dejando al productor un pequeño margen de ganancia y todos los riesgos involucrados en la producción.

La economía hortícola es sumamente frágil para enfrentar las condiciones que está generando el Tratado Trilateral de Libre Comercio, porque los mercados del centro están siendo materialmente copados por productos internacionales, y los productores nacionales del centro, a su vez, están buscando en el sureste sus mercados alternativos. Así que los mismos chaulas que tienen puestos de calabaza, rabanitos, chiles, *washi* (leguminosas), etc., en el mercado de San Cristóbal, se ven en serios problemas para controlar los mercados locales, en donde se pueden ver piñas de Veracruz, manzanas y jitomate en cajas empaquetadas en Sinaloa, naranja de diversos estados de la República, brócoli del Bajío, papa de Puebla, etcétera.

Los productores hortícolas, aunque expoliados por el coyotaje chaula, reconocen que el negocio es mejor que el de maíz, siempre y cuando cuenten con crédito para comprar semillas, insecticidas y fertilizantes, pero la sola y reiterativa observación de la necesidad de créditos acusa que éstos ya no están disponibles para la mayoría de los hortelanos, ya que una alta proporción de las asociaciones de productores han caído en carteras vencidas.

Mercado internacional y dependencia

Existe, dentro de la lógica del mercado, una opción más para aquellos campesinos ajenos que cuentan con ventajías comparativas por tener a sus tierras ubicadas dentro de la franja agroecológica favorable para la producción de café. Así, en 1990, en Los Altos de Chiapas existían 3 632 hectáreas con plantaciones del aromático. La cafecultura cobró fuerza en la región durante los años 70 y 80 bajo el impulso del Programa Integral del Desarrollo Rural (Pider), el Instituto Nacional

Indigenista (INI), el Instituto Mexicano del Café (Inmecalé) y el Banco del Crédito Rural (Banrural). Lo que, en coincidencia con precios favorables del café, configuró condiciones relativamente propicias de capitalización.

Sin embargo el apoyo institucional decayó paulatinamente, lo cual se aprecia en el hecho de que la inversión pública federal en el sector rural ejercida en Chiapas cayó de 1 200 millones de pesos en 1982 a 192 en 1987 (a pesos constantes de 1978), situación que se agravó con la drástica caída de los precios del café que se extendió desde 1986 hasta 1994. Esto ha significado para los productores la falta de dinero para pagar a los jornaleros, liquidándose una fuente de empleo para aquellos lugareños que no tienen tierra; además, las quejas abundan en torno a que ahora "llevan alrededor de 4 o 5 años sin realizar la fertilización debido a que no tienen dinero para comprar el fertilizante, por lo que ahora producen café orgánico...".

Por tanto, en 1994, el 95% de los 72 mil pequeños propietarios productores en la entidad —los cuales tienen una extensión de 213 mil hectáreas— se encuentran con el problema de carteras vencidas, sin posibilidades siquiera de reestructurar su deuda. El presidente de la Unión Estatal de Productores de Café, Carlos Bracamontes Gris, dijo que son alrededor de 200 mil hectáreas del aromático las que se encuentran prácticamente colapsadas (*La Jornada*, 3 de enero de 1995:12).

Esta situación que golpeó brutalmente a los pequeños campesinos que fincaron sus esperanzas en la producción para la exportación, puso al descubierto la enorme vulnerabilidad de las estrategias basadas en los mercados internacionales, a los cuales se pretende insertarse desde una situación de graves desventajas e infraestructura, capitalización, técnica y organización.

Conclusiones y propuestas

Las consideraciones anteriores nos permiten desprender las siguientes propuestas:

1. La escasa infraestructura productiva y de servicios, la ausencia de encadenamientos productivos favorables, la falta de personal calificado, la lejanía de los mercados, los altos costos de inversión requeridos para generar un empleo industrial, y la inseguridad que ha generado el conflicto, restringen las posibilidades de generación significativa de empleos para los campesinos chiapanecos, quienes no tienen otra opción más que aferrarse a la tierra y tratar de fortalecer sus esquemas de producción.
2. La política asistencialista de los últimos tiempos ha dejado en manos invisibles de las "fuerzas del mercado" los problemas del desarrollo productivo, provocando el grave deterioro de los recursos productivos, del conocimiento tradicional, de la normatividad comunitaria y, en síntesis, de los niveles de vida de los pueblos indios. Un desarrollo real de las zonas indígenas requiere el concurso directo del Estado para impulsar la producción.
3. La sobrevivencia de los grupos indígenas seguirá basada, durante mucho tiempo, en la producción de maíz, frijol, la leña, y toda una gama de productos para el autoconsumo. Sin embargo, la frontera agrícola se ha agotado, y con ella llegaron a su fin las opciones de carácter extensivo.
 - La única opción de corto plazo consiste en mantener relaciones de precios favorables entre productos e insumos, para sostener los niveles de producción necesaria para asegurar el autoabasto familiar.
 - Sin embargo, dadas las tendencias del mercado, se requiere impulsar opciones de intensificación de la producción basada tanto en los conocimientos tradicionales a las formas de organización comunitarias de organización de la producción, como en los principios de la agroecología. Esta vía a su vez exige el apoyo para la realización de investigación y difusión del conocimiento.
4. Desde la ciudad se debe fortalecer la conservación de los recursos naturales de su área de influencia. De manera destacada la protección de la cubierta forestal y la conservación del suelo y el agua resultan vitales para el desarrollo futuro de las ciudades. La deforestación que está ocurriendo en aras de la supervivencia campesina pone en riesgo el aprovisionamiento de agua y los sistemas de drenaje de las ciudades. Sin embargo, la solución no estriba en "legislar" contra la deforestación, sino en establecer subsidios que permitan pagar el costo ecológico de mantener la cubierta forestal, e impulsar actividades económicamente atractivas para los propietarios de las tierras ubicadas en las cuencas de captación de agua para las ciudades.
5. Desde la ciudad se debe impulsar el desarrollo rural, como la capacitación para el trabajo, la investigación para el desarrollo, la generación de insumos para la producción y la ampliación del mercado para los productos rurales, en un marco de relaciones más equitativas. Para esto se requiere programar una inversión más equitativa entre las ciudades medias y los municipios incluidos dentro de su área de influencia, y el fortalecimiento de la descentralización municipal.
6. Es necesario lograr una mayor eficiencia y eficacia de los centros de servicios urbanos de manera que permitan atender también a la población proveniente de sus áreas rurales, superando las barreras culturales de acceso existentes.
7. Debemos superar el enfoque cuantitativo del desarrollo. Se requieren perspectivas integrales del desarrollo regional que integren a lo urbano con lo rural y fortalezcan los vínculos interregionales, de manera que se generen complementariedades de producción y de mercados, y se mejoren las relaciones interétnicas y de integración a la nación. Para esto se requiere revisar los artículos 4º y 27º de la Constitución, a fin de abordar de manera radicalmente distinta la relación de los grupos étnicos con la nación, para generar relaciones interétnicas de colaboración y no de confrontación.